

CONFLICTOS SOCIALES Y LA CONFLICTIVIDAD EN EL PERÚ: ESCENARIOS COMPARADOS

PERIODO 2006 - 2011	PERIODO 2012 - 2016	PERSPECTIVAS 2017 - 2021
<p>a) Escenario Político</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicio de un ciclo de conflictos sociales y violencia con saldos de víctimas. Las zonas y sectores de mayor conflictividad se centran en las comunidades amazónicas, regiones del sur por disputas territoriales en torno a proyectos hídricos, entre las más importantes. • Conflictos con la minería ilegal se intensifican con un alto número de víctimas • Gobierno impulsa cambios legales y políticos para incentivar inversiones mineras, forestales y energéticas, en territorios comunales andinos y amazónicos: paquetes ambientales. • Violencia en los conflictos sociales en regiones imponen agendas de negociación y plataformas contrarias a la política de gobierno. • Negativa del gobierno de asumir políticas de cambio en materia de consulta previa y protección del medio ambiente • Carencia de una estrategia de contención y disuasión en los aparatos policiales y militares, generó una alto índice de muertos y heridos en las confrontaciones. • Se intensifican las demandas por vivienda popular que impulsa las invasiones de terrenos. Las invasiones más fuertes se dirigen a huacas y el patrimonio arqueológico. Se evidencian formación de mafias de invasiones con vinculaciones a grupos de poder local. 	<p>a) Escenario Político</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta conflictividad social en el país, con agendas de corto plazo que requerían de una estrategia de cambios políticos y de negociación de políticas ambientales y de espacios de negociación formal.. • El giro político de Ollanta reactivó los conflictos sociales. La tregua se rompió a los pocos días de asumido el mando del gobierno. • La Ley de Consulta Previa se aprueba en el Congreso pero se mediatiza y paraliza su aplicación por presión de los gremios empresariales mineros. • Los mayores conflictos se centran en: grandes proyectos mineros, invasiones de terrenos y los daños ambientales producidas por empresas petroleras y mineras. • Se intensifican los conflictos con mineros ilegales • Las invasiones de terrenos urbanos y arqueológicos se extienden a todo el país. Se evidencia una carencia de política de vivienda popular. • Nuevas leyes drásticas que penalizan la movilización social. • El gobierno de Humala perdió base social y política; perdió relación con gobernadores regionales. • Las políticas redistributivas y la creación de programas sociales no amenguaron la conflictividad social, particularmente en el sur andino. 	<p>a) Escenario Político</p> <p>Las perspectivas de los conflictos sociales, para el periodo 2016 están marcados por los siguientes hechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una <u>agenda ambiental</u> que busca imponerse en la negociación con el gobierno de PPK. No hay articulación de esta agenda ambiental con los conflictos de larga duración. • El <u>agotamiento de las instancias de negociación</u> establecidas por los gobiernos anteriores: Mesas de Diálogo, Grupos de Trabajo, Comisiones Multisectoriales • Conflictos fuera del ámbito del gobierno central como las invasiones de terrenos urbanos que enfrenta grupos poblacionales con Municipios y Regiones • En el conflicto entre Ejecutivo – Legislativo, se abre la oportunidad de la presencia activa de la movilización social. <p>La expectativa de cambios políticos y los compromisos firmados por el presidente electo, puede generar una tregua en la conflictividad social.</p> <p>La derrota del fujimorismo es considerada una victoria de todos los grupos de oposición al gobierno de Humala de ahí la expectativa para una tregua política sostenida</p> <p>La alianza con los gobiernos regionales y locales puede canalizar las demandas sociales, pero no es suficiente. Lo determinante es el tratamiento de los conflictos emblemáticos: Conga – Tía María – Las Bambas – Datem del Marañón (las cuatro cuencas)</p> <p>No obstante, los conflictos mencionados deben estar manejados desde la PCM, subordinando las</p>

		operaciones de negociación y de control de los operativos policiales al mando político del Presidente del Consejo de Ministros.
<p>b) Los Conflictos de Larga Duración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sectores con alta conflictividad social y de violencia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conflictos con pueblos indígenas por derechos territoriales y concesiones de territorios. El momento culminante de este conflicto fue la huelga nacional amazónica y la tragedia de La Curva del Diablo en Bagua ➤ Conflictos por Proyectos de infraestructura hídrica que enfrenta a regiones: el mayor conflicto se presentó en torno al proyecto Majes Siguan II que enfrentó a cusqueños con arequipeños ➤ Proyectos mineros: Tía María – Majaz – Puno – Cajamarca. El centro del conflicto fue la aprobación de los EIA, y las negociaciones por licencia social ➤ Disputas por redistribución del canon minero, que enfrentó a regiones de Moquegua - Tacna ➤ Minería informal e ilegal que buscan validar su situación con la imposición de huelgas que paralizaron el sur del país ➤ Disputas por límites y demarcación territorial: el conflicto mayor se produjo entre Puno – Moquegua – Tacna, y entre las provincias de Lares y La Convención (Cusco) ➤ Invasiones de terrenos urbanos y periurbanos en las capitales regionales y provinciales. ➤ Conflictos por erradicación de hoja de coca en zonas de presencia de narcotráfico. ➤ Conflictos contra autoridades municipales y regionales con alto nivel de violencia. 	<p>b) Los Conflictos de Larga Duración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonas y sectores de mayor conflictividad: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proyectos mineros: Conga – Espinar – Tía María – Las Bambas. Los conflictos si bien tienen una base común: proyectos mineros, difieren en tanto las demandas de las poblaciones son diferentes. ➤ El conflicto de las comunidades contra la contaminación ambiental de proyectos petroleros y la demanda de Consulta previa en proyectos petroleros y mineros ➤ Proyectos infraestructura Hídrica: Majes Sihuas, enfrentamiento que no cesa y que se articula a un conflicto minero en Las Bambas y Tintaya ➤ Invasiones de terrenos urbanos y periurbanos en Lima y regiones. En zonas arqueológicas las invasiones crecen en Lambayeque – Nazca y Pachacámac. Se evidencia la presencia de mafias de terrenos y su articulación con autoridades municipales ➤ Minería ilegal del Oro: Madre de Dios – Arequipa – Andahuaylas. Con alto grado de violencia con el objetivo de acabar con las normas de protección ambiental y rechazo a la formalización. ➤ Reactivamiento del movimiento sindical: incremento de paros, número de huelguistas y horas / hombre perdidas. ➤ Movilizaciones sociales de jóvenes contra leyes del Congreso y decisiones congresales, siendo las más importantes: la oposición a la denominada <i>Ley Pulpín</i>, y el rechazo a la denominada “repartija” en la elección del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional 	<p>b) Los conflictos de Larga Duración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los casos que aún se mantienen latentes son: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proyectos mineros paralizados por conflictos sociales: Conga – Tía María – Las Bambas. El tratamiento para cada debe ser distinto porque la naturaleza del conflicto es diferente. Los mecanismos de diálogo que se aplicaron no dieron resultados, no obstante el trabajo principal para la negociación le corresponde a las empresas involucradas en dichos conflictos. ➤ Problemas con proyectos mineros paralizados por crisis económica: Doe Run. Habiendo sido puesto en agenda por el presidente electo, el problema es la oposición no solo del congreso sino de las organizaciones ambientalistas que impedirán la puesta en marcha de las operaciones de la Doe Run. ➤ Reactivación del proceso de invasiones de terrenos urbanos en Lima y regiones. Actualmente hay una compleja red de invasiones de terrenos, con articulación política y con redes de mafias. Son invasiones que tienen a la base la poca posibilidad que tienen los pobladores pobres extremos de acceder a planes de vivienda ➤ Proyectos hidroenergéticos: Majes Siguan, sigue pendiente, aunque los compromisos con autoridades de Espinar con el OGRE Arequipa están abiertas. ➤ Diversos casos registrados como conflictos sociales deben ser valorados y tratados sectorialmente y circunscritos a los espacios locales y al tratamiento específico del ministerio o del gobierno regional. No hay razón para articular estos casos locales a conflictos mayores ➤ Es conveniente una evaluación seria y prolija del funcionamiento de los diferentes espacios de diálogo establecidos por el gobierno: Comisiones Multisectoriales, Grupos de

		Trabajo. Mesas de Diálogo, entre otros.
<p>c) Liderazgos y Estrategias políticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposición de liderazgos radicales de los Frentes de Defensa, y desborde la violencia en regiones del sur y las regiones amazónicas. • Exigencia de cambios políticos para canalizar y resolver las protestas sociales. Partidos y movimientos con una agenda de cambios políticos. • La existía una estrategia de diálogo del Gobierno articulada; ni se contaba con aliados en los gobiernos regionales y locales • La confrontación se tornó más violentas básicamente porque la policía careció de estrategias de contención y negociación in situ, y porque en la población existía una gran experiencia en enfrentamiento en terrenos abiertos, lo que transmitió una imagen de ingobernabilidad y violencia extrema. • El alto número de víctimas generó una gran presión contra el Gabinete de Yehude Simons y provocó su caída 	<p>c) Liderazgos y Estrategias políticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reagrupamiento de los liderazgos radicales, sobre la base de la bandera de la traición a las promesas de cambio • Rearticulación de los conflictos de mineros ilegales en Madre de Dios, Andahuaylas, - Ayacucho. • Se reducen los puntos críticos de la conflictividad, sobre todo en las comunidades amazónicas donde pasa a predominar la negociación y el diálogo. • Casos de Las Bambas, Puno, Cusco, la conflictividad contra proyectos mineros se estabiliza • No obstante la reducción de conflictos, los que subsisten lo hacen con un alto grado de violencia, de ahí que el número de víctimas se mantenga aún en proporciones altas.. • Los liderazgos radicales no logran articularse y se quedan como grupos de presión en los ámbitos locales, sin proyecciones nacionales. • Ausencia de espacios políticos y de partidos que canalicen las protestas sociales en una perspectiva de gobierno. • Se debilitan la participación política de los liderazgos radicales, sin posibilidad de imponer una agenda de cambios políticos. • Nuevas leyes que penalizan la agresión a policías que puede intensificar el descontento en los nuevos gobernantes. • La ausencia de un liderazgo político se evidencia cuando las fuerzas policiales no se articulan ni subordinan al mando político de la PCM. Eso explica que número de víctimas: muertos y heridos en los conflictos sea alto todavía. • Los conflictos y la violencia con saldos de víctimas son los que determinaron crisis políticas y caídas de gabinetes 	<p>c) Liderazgos y Estrategias políticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Límites de los procesos de diálogo y de las mesas de desarrollo como mecanismo de resolución de los conflictos sociales. Las mesas de Diálogos solo han fijado agendas de trabajo sin posibilidad de abordar una solución establea las demandas aprobadas y zanjadas en las diferentes actas de compromiso • Aunque los conflictos se encuentran focalizados en los ámbitos locales provinciales, no obstante, los líderes tienen una eficiente articulación a grupos de presión nacional e internacional y poseen una gran capacidad y experiencia de la confrontación. • Expectativas no resueltas y embalsadas pueden reactivar demandas sindicales y de los movimientos sociales. • Perfilar una nueva estrategia de gestión de los conflictos sociales obliga a definir un solo mando político en la negociación del conflicto, lo que implica subordinar el mando policial de las operaciones de disuasión y contención al la estrategia de negociación del gobierno o de las autoridades encargadas de la negociación del conflicto social.